

REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS Y SUS IMPACTOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE TÉRRABA, BUENOS AIRES Y CEIBO

REFLECTIONS ABOUT THE DIQUÍS HYDROELECTRIC PROJECT AND ITS SOCIAL IMPACT ON COMMUNITIES OF TERRABA, BUENOS AIRES AND CEIBO

Bohián Pérez Stéfanov*
bohian.perezstefanov@ucr.ac.cr
bohian@gmail.com

Fecha de recepción: 23 noviembre 2010 - Fecha de aceptación: 19 enero 2011

Resumen

Desde la década de 1960, el Instituto Costarricense de Electricidad ha dejado patente su deseo de aprovechar la cuenca del río Térraba para la generación hidroeléctrica a través de megaproyectos, siendo el último planteamiento el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), que estaría inundando cerca de 7000 hectáreas, forzando la reubicación de aproximadamente 1500 personas de diez comunidades, además de la afectación de más de 700 hectáreas de territorios indígenas. Contextualizar históricamente este proyecto nos permitirá comprender mejor el desarrollo de las dinámicas socioculturales y las tensiones comunales que surgen en tres de las comunidades que se están viendo mayormente afectadas por el PHED: Térraba, Buenos Aires y Ceibo.

Palabras clave: Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Térraba, Buenos Aires, Ceibo, energía hidroeléctrica, indígenas, dinámicas sociales.

Abstract

Since the 1960's, the Instituto Costarricense de Electricidad has made clear its desire to harness the river basin of Térraba for hydroelectric generation through megaprojects, the last approach the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), which would be about 7000 hectares flooded, forcing the relocation of approximately 1500 people from ten communities, and the involvement of more than 700 hectares of indigenous territory. Historically contextualize this project will allow us to better understand the dynamic development of social, cultural and communal tensions that arise in three of the communities that are being most affected by the PHED: Terraba, Buenos Aires and Ceibo.

Key words: Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Térraba, Buenos Aires, Ceibo, hidroelectrical energy, social dynamics, indigenous peoples.

* Escuela de Turismo Ecológico, Sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica

Introducción

A partir de la experiencia y participación en investigaciones sociales y arqueológicas en el Pacífico Sur costarricense durante los últimos seis años, se espera aportar a la mejor y mayor comprensión de las dinámicas socioculturales y tensiones comunales que actualmente están surgiendo entre los diversos actores sociales a raíz del planteamiento de un megaproyecto hidroeléctrico en la zona sur de Costa Rica, como una oportunidad de proyectar la acción social de la Universidad de Costa Rica como compromiso en el desarrollo comunal de regiones históricamente marginadas.

La información sobre la cual se basa el presente trabajo ha sido el resultado de visitas a comunidades y entrevistas con actores claves de la zona de interés, además del apoyo del Sistema de Estudios en Posgrado de la Universidad de Costa Rica, que a través de la Maestría Académica en Antropología permitió la realización de giras de campo para la recuperación de una serie de datos de fuentes primarias sobre los temas mencionados y en general, sobre la concepción que tienen en la actualidad agrupaciones e individuos sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.

Esta información, conjuntamente con la experiencia de contacto e interacción con la realidad de la región, facultan la presentación de este ensayo, cuya intención es aportar a la construcción de conocimiento sobre la problemática y a la vez brindar insumos de apoyo para instancias como la Comisión de Evaluación del PHED creada por la Universidad de Costa Rica, para estudiar los factores sociales de afectación y valoración de los impactos generados y a generar como parte del desarrollo e implementación de este megaproyecto.

El documento inicia con una pequeña síntesis sobre los antecedentes del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, dado que su incidencia en las reacciones sociales deben entenderse en el marco histórico de los proyectos que el Instituto Costarricense de Electricidad ha impulsado en la región desde hace décadas; se hace una pequeña referencia a tres de las principales comunidades

abordadas, pero también por ser las que concentran la mayor cantidad de población y por tanto de contradicciones: Ceibo, Buenos Aires y Térraba; se hace una pequeña mención al tema del turismo por ser este uno de los argumentos más sentidos en el discurso oficial sobre los beneficios del PHED para con la región y las comunidades. Un apartado de reflexiones finales deja abierto el debate sobre el alcance real e impactos que está generando el proyecto en la región.

Aspectos generales sobre el Proyecto Hidroeléctrico Boruca

Desde el año 2006, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió efectuar el cierre técnico del Proyecto Hidroeléctrico Boruca (PHB) que desde la década de 1960 se planeaba realizar sobre el río Grande de Térraba, a la altura de la comunidad de Cajón de Boruca. Además de las razones técnicas surgidas a partir de una consultoría entregada por el consorcio colombiano INGETEC en el 2002 y que motivaron el cierre técnico, existen una serie de factores de orden social, principalmente la organización de comunidades indígenas como Curré, las que desde la década de 1990 han ofrecido una lucha legal y social en contra del PHB.

No obstante, el ICE no abandona sus planes de aprovechamiento de la cuenca y en el año 2004 anuncia (a lo interno de la institución) el inicio de los estudios de prefactibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Boruca opción Veraguas, que posteriormente se consolidaría como el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), ubicando su eje de presa a tres kilómetros aguas arriba de la comunidad de El Brujo de Buenos Aires, sobre el río General Superior, principal tributario del río Grande de Térraba con un aproximado del 60% de su caudal. Los ríos Coto Brus y Cabagra junto a tributarios secundarios aportan el restante 40%.

Este proyecto tendrá una extensión de aproximadamente 65km² únicamente en su área de embalse, los cuales inundarán 10 centros de población: Pilas, La Gloria, La Tinta, Bajos de

Caracol (Paso La Tinta), Parcelas, Ceibo, Remolino, Bajos de Río Grande, Bajos de Pueblo

Nuevo y Ocochovi. Parcialmente afectará a las comunidades de Concepción (La Danta), Dibujada, Colinas, Ceibón, Bijagual y San Carlos. Asimismo, inundará un aproximado de 700 hectáreas de territorio indígena, de los cuales unas 630 hectáreas forman parte del Territorio Indígena de Térraba y las restantes del Territorio Indígena de China Kichá (cabécar), esta última en el cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. El resto de las comunidades y territorios están en la administración del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

Aunque el PHED y el ICE llevan más de cinco décadas en la región y ocho años de estar realizando estudios de prefactibilidad en la zona actual del proyecto, es hasta los últimos tres años que distintas comunidades afectadas de forma directa e indirecta, han empezado a organizarse para reflexionar sobre los impactos reales y las expectativas particulares que el PHED ha generado, genera y generará en cada comunidad y en sus habitantes.

Para efectos prácticos, el entorno social afectado por el PHED se dividirá en tres sectores primordiales. Un primer grupo con las comunidades que se verán total o parcialmente afectadas por el proyecto, lo que plantea la necesidad de reubicar la totalidad o una parte de ellas, bajo un programa de reasentamiento impulsado desde el PHED.

Un segundo grupo son comunidades que no se verían afectadas por la inundación de terrenos, pero sí por la implementación de obras asociadas al proyecto (tránsito, carreteras, casa de máquinas, túneles, tajos, escombreras, etc.), las que incluso están generando impactos desde hace por lo menos ocho años en las dinámicas socioculturales de las mismas; entre ellas tenemos a Buenos Aires, Térraba, Ceibón, Santa Marta, Pueblo Nuevo, Paraíso, Palmar Norte, Cañablancal-IDA, entre otras.

Un tercer grupo integrado por aquellas localidades que por su ubicación periférica a las obras del proyecto no se ven afectadas directamente, pero sí enfrentan las consecuencias del desarrollo e implementación de un megaproyecto de alcance internacional. Entre estas destacan Ciudad Cortés, Palmar Sur, Guagaral, Pejibaye,

El Águila, China Kichá, Salitre, Ujarrás, Cabagra (estas cuatro últimas son territorios indígenas bribri y cabécar), las comunidades asociadas a la desembocadura del río Grande de Térraba y la zona del humedal Térraba – Sierpe, categoría Ramsar (Convención relativa a los *Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas*, adoptada en Ramsar, Irán, en 02/02/1971; modificada en 03/12/1982 y 28/05/1987).

Aunque parte del territorio indígena de China Kichá será inundado, corresponde a terrenos no habitados en las partes bajas, dedicadas a la ganadería e incluso que están en manos de no indígenas. La comunidad como tal, al ubicarse en una parte alta, no se está viendo afectado por inundación y al estar localizado en una de las colas más alejadas de del embalse, tampoco sufriría consecuencias por obras.

Es importante destacar que el diseño no convencional del PHED implica una Casa de Máquinas (donde se ubicarán las turbinas generadoras de electricidad) que no estará a “pie de presa” como en todos los demás proyectos hidroeléctricos del país, lo que quiere decir que no se construirá junto con el muro de la presa, sino en otra ubicación. Esta casa tendrá su ubicación en los inicios del Delta del Diquís, a 4km de la ciudad de Palmar Norte, en las inmediaciones de la localidad de Cañablancal, un asentamiento del IDA construido a finales de la década de 1990 para albergar a las familias damnificadas por el huracán Mitch de 1998.

El agua para las turbinas será transportada por medio de un túnel que tendrá más de 14 km de longitud y 8 metros de diámetro, comunicando lo que actualmente es el Valle de Pilas (260m.s.n.m.) con el delta del Diquís (0m.s.n.m.), pasando por debajo del sistema montañoso de la Fila Costeña.

Retomando el tema de la organización comunal, hay que resaltar que en los inicios del 2006, cuando el PHED es formalizado como proyecto dentro del ICE, los habitantes de la región evidenciaron un marcado desinterés en el tema, lo cual es comprensible en el contexto histórico de vivir en una región donde por casi una generación completa se ha hablado del desarrollo

de proyectos hidroeléctricos que nunca se han concretado en la realidad.

Sin embargo, con la administración Arias (2006-2010) y el cambio en la Presidencia Ejecutiva del ICE, se empezó a generar un discurso político a través de los medios de comunicación masivos, en el que se garantizaba el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico para los primeros meses del año 2009 y su puesta en operación para el año 2016.

Esto exigió inyectar una significativa cantidad de recursos para implementar nuevos campamentos y espacios de oficinas para el constante aumento del personal contratado, así como de maquinaria y vehículos de transporte. El resultado: se dieron movimientos no vistos en la región ni siquiera en los años de mayor impulso del PH Boruca.

Este crecimiento exponencial de infraestructura y personal en menos de un año, luego de casi cuatro décadas de planteamientos erráticos por parte del ICE en cuanto al desarrollo del PH Boruca, generaron gran confusión en las comunidades y reacciones encontradas entre sus vecinos. Esto se tradujo en una desorganización y falta de espacios objetivos y reales de reflexión sobre las consecuencias regionales, locales e individuales de un proyecto de esta magnitud.

Este golpe de confusión hay que entenderlo en el contexto no del PHED, sino del Proyecto Hidroeléctrico Boruca (ver mapa 1), que si bien ambos tienen características muy diferentes y sus áreas de embalse pudieran considerarse cosas aparte, comparten una misma zona de interés e incluso se traslapan en cuanto a la zona de embalse y obras a desarrollar. El compartir una misma región y ese traslape, fue un golpe de suerte y un movimiento técnico – político muy conveniente para el ICE, ya que los cuarenta años de investigaciones en la región en el marco del PHB no se verían como un esfuerzo en vano, sino como la base de insumos técnico – ambientales para impulsar la nueva opción.

Así, para el ICE, el planteamiento del PHED en el año 2006 no significó un inicio “desde cero”, sino más bien la consolidación de un proyecto que necesitaría solo unos pocos años para solventar los detalles técnicos e

investigativos necesarios. La geología, el componente biótico, la realidad socioeconómica e incluso el apartado arqueológico ya se había abordado en años de investigaciones (con sus respectivos pendientes), con un cúmulo de información significativa que permitía contar con una base sólida para el desarrollo del PHED.

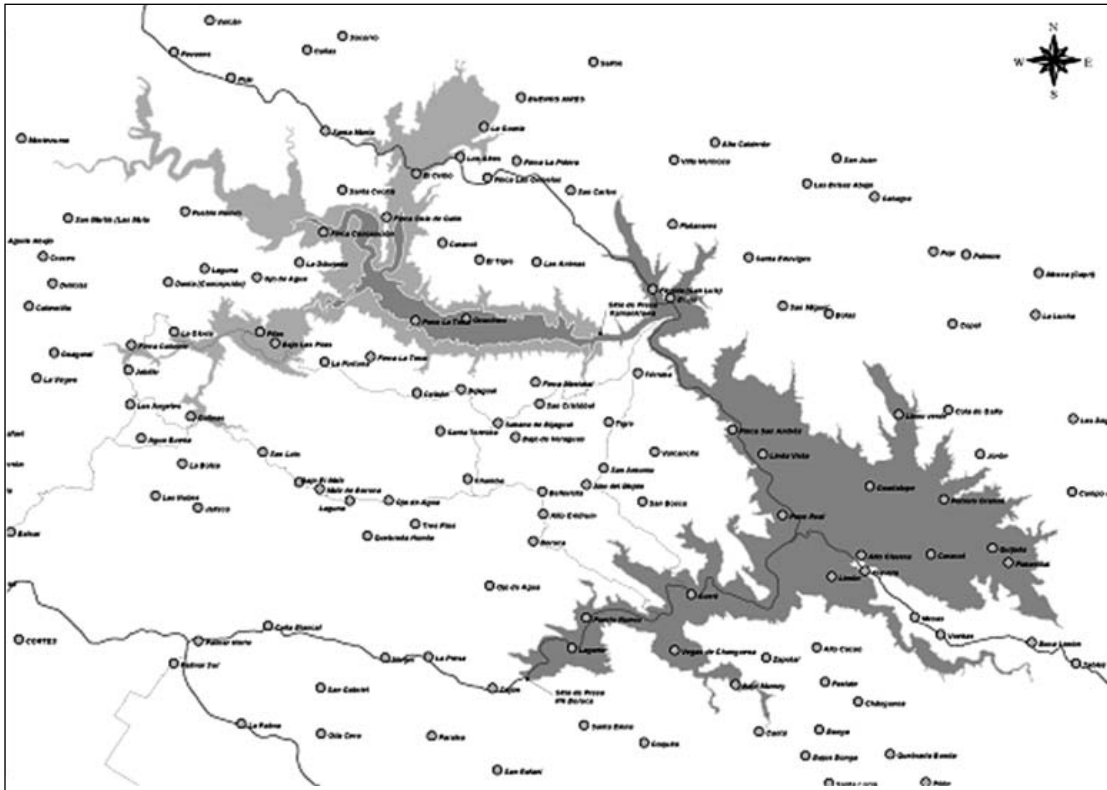
No obstante, no se puede decir lo mismo para las comunidades y la población en general de la región, ya que en cuestión de unas pocas semanas, localidades que por cuatro décadas vivieron bajo la incertidumbre de un megaproyecto que todos daban por un hecho – pero que no se consolidaba –, empezaron a escuchar noticias de su cancelación y la posibilidad de un nuevo proyecto que estaría afectando otras comunidades y otras regiones. El ICE – PHB nunca generó un espacio de comunicación con las comunidades y actores sociales para informar del cambio.

Curré y Boruca tardaron cerca de dos años de convencerse que el PHB ya no se realizaría, y que ese anuncio no es parte de otra “estrategia” del ICE por disminuir la reacción social que el proyecto ya estaba generando en la región desde mediados de la década de 1990.

Los habitantes de Potrero Grande, una de las comunidades más pobladas que se verían reubicadas por el PHB, se percatan que ya no será afectada en nada por el nuevo proyecto, pero a estas alturas del año 2010, la comunidad está disminuida, muchas familias, ante décadas de amenazas de un megaproyecto decidieron abandonar la zona; la inversión se estancó; muchos servicios públicos se trasladaron a localidades “más seguras” como la ciudad de Buenos Aires; el valor de la tierra bajó; muchas familias vendieron sus propiedades o las dieron en alquiler a bajos precios ante el supuesto de ser una zona a inundar en el mediano plazo. Esta situación fue aprovechada por la transnacional PINDECO para adquirir grandes extensiones de tierra que a partir del 2007 y una vez reafirmado el descarte del PHB, se dedicaron a su transformación para implementar el monocultivo de la piña, generando un severo deterioro al medio ambiente, lo que fue denunciado ante SETENA y otras instancias en el año 2008.

Figura 1

Comparación de los dos esquemas de proyecto en la cuenca del río Grande de Térraba, en gris oscuro, proyección del embalse del PH Boruca; en gris claro, la proyección del embalse del PH El Diquís



(Fuente: Pérez, 2008).

El principal impacto lo recibieron las comunidades de Pilas, Ceibo, Parcelas y otras que se verían inundadas total o parcialmente por el embalse. Durante décadas los habitantes de estas comunidades se sabían en la periferia de lo que sería el PHB, con poca o nula afectación por el agua del embalse, cuando mucho por algunos pocos remansos de las “colas” del embalse, o quizá con consecuencias indirectas por obras asociadas. Sin embargo, en cuestión de unos pocos meses, de observadores pasivos, todos ellos se transformaron en actores activos y en el eje central del nuevo proyecto. Pilas será el centro del embalse y su valle quedará a más de 80 m de profundidad; Ceibo deberá reubicarse ya que recibirá la mayor cola de las tres que tendrá el embalse del PHED. Paradójicamente, universidades, ONG`s y

otros grupos organizados han puesto poca o nula atención a comunidades no indígenas.

Buenos Aires, la ciudad más grande de la región y cabecera de cantón, que antes ni siquiera entraba dentro de los estudios socioeconómicos a impactar por el PHB, no logra reaccionar al ver que en cuestión de semanas se construyen campamentos y que el personal del PHED pasa de 20-25 personas en el 2006 a más de 400 en el 2008 y más de 600 para finales del 2009 (para la fecha de este informe se estiman en aproximadamente 800 personal el personal del proyecto). Estas cifras se opacan ante los cálculos del proyecto y del ICE que estiman entre 3000 y 3500 personas a contratar en el momento de mayor auge de la construcción del PHED y cuyo centro de operación principal estará dentro del contorno urbano de la ciudad.

Bajo esta descripción general, no sorprende que apenas para el segundo semestre del 2009 empezaran a surgir la mayoría de las agrupaciones civiles formales e informales que buscaran la discusión de los verdaderos alcances de este proyecto hidroeléctrico; las políticas aplicadas hasta el momento; los impactos generados en los últimos años y los que se generarán a futuro; las políticas reales de la administración del proyecto en cuanto a la compensación, mitigación y prevención de los impactos, pero sobre todo, la incertidumbre general en cuanto al alcance real del proyecto y sus implicaciones. Cuestionamientos lógicos cuando las únicas fuentes de información han sido las autoridades del proyecto y los medios de comunicación que reproducen el discurso oficial (político) de un PHED que entraría en funciones para el 2016.

Comunidad de Ceibo

Aproximadamente desde mediados del año 2006, el PHED ha gestionado la creación de asociaciones comunales llamadas Comisiones de Enlace, en cada una de las comunidades afectadas directamente (primer grupo) e integradas por personas del lugar y que serían el canal de comunicación directo y formal entre las inquietudes y necesidades de la comunidad y las autoridades del proyecto, en ambas vías. Sin embargo, ya para el 2010, este tipo de estructuras han agotado su proceso de viabilidad y contacto con las comunidades; la población en cada localidad se ha polarizado a favor o en contra; no hay claridad en el discurso oficial acerca del verdadero alcance de los impactos del proyecto; las autoridades del PHED y del ICE no han ofrecido un panorama claro en cuanto a cronograma de actividades y medidas de compensación-mitigación de los impactos socioeconómicos ocasionados.

El personal del PHED asegura que éste se encuentra en “etapa de estudios”, frase repetida en los últimos cuatro años, mientras que en los medios de comunicación se sigue divulgando la fecha del 2016 como conclusión de la obra. Esta fecha se ve demasiado cercana sobre todo si se consideran los siguientes aspectos: no existe un plan específico de atención a las necesidades comunales e individuales surgidas por la

presencia del proyecto y por las consecuencias de su implementación; no hay claridad de los lugares de reasentamiento, ni de la modalidad en que se va a desarrollar esta política de reubicación forzada de diez comunidades (más de 1400 personas); los propietarios de fincas y terrenos no están claros en cuanto a la política de adquisición de sus propiedades por parte del PHED.

Sobre este último punto, se ha generado un nivel de expectativa en constante aumento por más de cuatro años, en los cuales la desinformación y desconocimiento han sido la nota imperante, ocasionando, primero, una ola de optimismo por parte de los propietarios quienes piensan en un valor por hectárea sin ningún respaldo técnico, para quedar “pasmados” cuando en el 2009 el PHED adquiere las primeras propiedades (en los alrededores de Buenos Aires) a un precio sumamente inferior al esperado.

Como resultado se producen momentos de desasosiego entre la población ante la incertidumbre de cuál va a ser el valor real entregado por sus propiedades, lo que se agrava si se toma en cuenta que muchas familias han dependido históricamente de la producción agrícola y ganadera en terrenos de gran vocación agropecuaria, difícilmente ubicables en otras localidades o que tienen precios excesivos y muy superiores a los que posiblemente ellos reciban por parte del PHED-ICE. Esa incertidumbre prevalece.

Otra de las principales preocupaciones mencionadas es el tema de reasentamiento de las diez comunidades, que a la fecha no han tenido una respuesta clara en cuanto al lugar, ubicación, modalidad o cronograma que se seguirá para ejecutar el proceso. En este tema, el ejemplo de la comunidad de Ceibo es uno de los más claros. Como dato específico, se debe resaltar que es la comunidad más grande con aproximadamente 600 personas. Su localización actual está en los alrededores del cauce medio y bajo del río Ceibo, a la altura de la carretera Interamericana Sur y el puente que cruza el mismo río.

Esta comunidad se conformó en la década de 1950 como un caserío disperso de propietarios de fincas ganaderas y agrícolas que interactuaban con las comunidades de La Tinta, Pilas y Dibujada hacia el oeste y con Buenos Aires hacia el noreste. Desde la década de 1990

se da un crecimiento sostenido de la población constituyéndose el centro actual de la localidad, en relación directa con el establecimiento del asentamiento del IDA conocido como Parcelas del Ceibo, ubicado en la margen contraria del río Ceibo. Al ser la comunidad con mayor cantidad de población y la que cuenta con mayor acceso a servicios públicos y privados gracias a su ubicación estratégica en relación con la carretera Interamericana, ha sido parte de una atención particular por parte de autoridades del PHED.

Las políticas de acción social del PHED en el proceso de reasentamiento han girado en torno a la generación de espacios de discusión en los cuales han incentivado que las comunidades propongan lugares específicos donde quisieran reubicar sus casas y asentamientos, reconociendo que son los propios moradores los que conocen de sus necesidades, así como las tierras en donde esas necesidades podrían solventarse ante una reubicación forzada. Se manejaron de dos a tres propuestas por comunidad, de acuerdo a un ejercicio de percepción que los propios habitantes tuvieron en su “visión” de la futura comunidad (Nuevo Ceibo, Nuevo Pilas, etc.).

Precisamente, Ceibo es una comunidad cuyo desarrollo ha respondido en gran parte a las facilidades que le ha generado el ubicarse cerca de la carretera Interamericana, lo que ha permitido un flujo fácil y constante a los centros urbanos, mayor población, acceso a fuentes de trabajo, a servicios y a bienes, en comparación con la mayoría de las comunidades ubicadas sobre la margen izquierda del río General Superior (aguas abajo: La Tinta, Pilas, La Dibujada, La Gloria, Ceibón, etc.).

El embalse del proyecto al inundar la comunidad de El Ceibo, anegará aproximadamente cuatro kilómetros de la carretera Interamericana. Desde un inicio se habló de dos posibles proyectos para la correspondiente restitución de dicho tramo: la primera, una reorientación de la carretera por lo que se conoce como el “camino viejo a Buenos Aires”, que estaría ingresando por la comunidad de Volcán para desembocar a Buenos Aires por el sector norte de la ciudad y reconectarse nuevamente al resto de la carretera; la segunda opción es la construcción de un puente elevado sobre la garganta de la cola del embalse a la altura de Ceibo, con

más de 1000 metros de longitud que conectaría las partes más altas entre Parcelas de Ceibo y los Altos de Caracol, ingresando por la comunidad de Santa Marta. Como resultado de un análisis inicial (y poco profundo) en los años 2007 – 2008, se establece esta segunda opción como la más viable (ver Infografía del PHED).

El conocimiento empírico de los habitantes de Ceibo y la importancia histórica de la carretera Interamericana en el desarrollo de su comunidad, deciden que la opción prioritaria para su reubicación serían las tierras altas de la parte de Altos de Caracol, coincidiendo con lo que sería la salida oeste del puente. Esto les permitiría seguir vinculados a esta importante arteria vial e incluso, aprovechar nuevos potenciales económicos como lo serían el (supuesto) flujo turístico por la obra específica y el proyecto en general. Como resultado del programa impuesto por el PHED, esta se convierte en la única opción viable para la comunidad y sus habitantes.

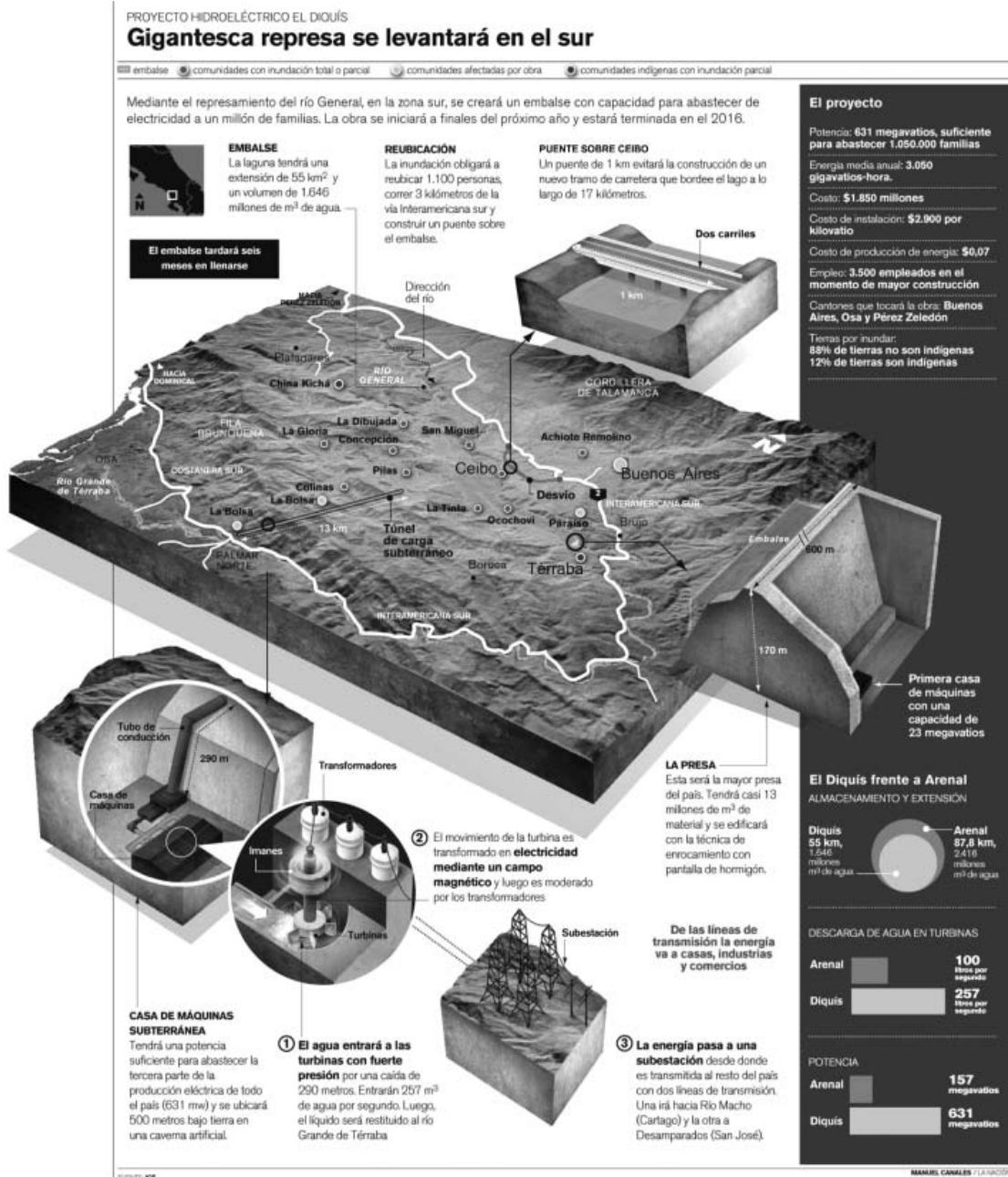
Es de aclarar que una buena parte de estas tierras se encuentran dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar de la empresa COOPEAGRI y algunos segmentos están dedicados a la siembra de piña. En general, son suelos muy arcillosos y deteriorados por décadas de explotación agraria mecanizada e industrial, con accesos inciertos al recurso hídrico por carencia y superficialidad de los mantos lo que sugiere potencial de contaminación por filtración; así mismo, el botadero o relleno sanitario de la región está a menos de cuatro kilómetros.

Durante más de dos años a las familias de la comunidad de Ceibo se les alimenta la idea de reubicarse en el punto escogido. No obstante, para finales del 2009 desde el proyecto empiezan a surgir datos confusos e inciertos sobre posibles cambios en los planes, que finalmente cobran fuerza a inicios del 2010. La información menciona que la viabilidad de un puente de tales dimensiones es dudosa por factores técnicos y económicos, tornándose la primer opción (reponer el tramo por el sector norte de Buenos Aires) como la única posible. No hay información consistente al respecto.

Es de fácil comprensión que ante este cambio abrupto de la realidad expuesta por el PHED, la comunidad de Ceibo entra en estado

Figura 2

Infografía de las principales obras que integran al PHED, incluyendo el puente sobre río Ceibo, túnel y Casa de Máquinas en Palmar Norte (adaptado del periódico La Nación).



de confusión, dado que el lugar escogido pierde todo atractivo y lógica sino es la existencia del puente y la carretera, tornándose más bien inviable y amenazante de quedar la nueva comunidad aislada y con dificultades de acceso a los mayores centros poblacionales de la región (Buenos Aires, San Isidro de Pérez Zeledón, Palmar Norte y Sur, etc.).

La comunidad empieza a reaccionar, se dan amenazas de cierre de caminos para carros y maquinaria oficiales o alquilados del ICE-PHED; se conforman agrupaciones de rechazo al proyecto, las que exigen mayor y más clara información; mujeres y hombres empiezan a expresar sentimientos de estrés, impotencia y desesperación ante la falta de información; surgen “rumores” sobre amenazas de despido de personal contratado por el PHED, que habite en Ceibo y que forme parte de alguna de estas agrupaciones; hay relatos de mujeres jefas de hogar y de otros habitantes que comentan prácticas de “aislamiento” hacia ellas y ellos en la organización y convocatoria a talleres, cursos y actividades impulsadas desde el ICE-PHED.

En recientes visitas a la comunidad (septiembre, 2010), esta oficializa su oposición a las políticas del PHED y declara persona non grata al director del proyecto, Ing. Franklin Ávila. Han trabajado en la elaboración de una propuesta alternativa surgida desde la comunidad en cuanto al aporte que debe generar el proyecto y el compromiso que debe adquirir con la región. Este documento ha sido entregado a las autoridades del ICE, del PHED, al Gobierno local (Municipalidad de Buenos Aires), a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Aparentemente, en ninguna de las instancias han recibido respuesta, aun cuando han pasado más de cuatro meses desde su entrega.

Es importante hacer la acotación, que en principio, la comunidad de Ceibo como corporación orgánica no se opone al proyecto en cuanto a su realización, sino a las políticas implementadas y al tipo de manejo que la dirección del PH El Diquís ha dado al tema social y particularmente a las políticas de reasentamiento. Según algunas opiniones de líderes comunales, lo que reclaman es la falta de claridad, el secretismo, las amenazas

y “la arrogancia” de las autoridades en el manejo del tema, reafirmando que la única información que poseen esta y las otras comunidades, es la proporcionada por los personeros del proyecto y por los discursos oficiales difundidos en los medios de comunicación.

Sin duda alguna, el aporte de las Universidades Públicas en cuanto a información técnica alternativa (coincidente o no con la aportada por el PHED), es una de las acciones más requeridas por las comunidades y público en general, siendo un espacio de impulso a la imagen de las universidades como gestoras del desarrollo sostenible nacional, regional, comunal e individual. Es opinión de este autor la urgencia de establecer este espacio de acción social.

Comunidad de Térraba

Térraba es el territorio indígena ubicado en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, adscrito al grupo étnico teribe originario de la región de Bocas del Toro en el actual Caribe de Panamá. Una parte de ese grupo indígena fue trasladado forzosamente por la agrupación religiosa de los franciscanos durante los inicios del siglo XVIII, asentándose en los límites de las Sabanas de Buenos Aires, fundando la población San Francisco de Térraba bajo el régimen de esa agrupación religiosa.

Térraba, al igual que gran parte de los territorios indígenas en Costa Rica, enfrenta severos problemas en cuanto al acceso a recursos, oportunidades y fuentes de empleo, además del establecimiento de políticas de autogestión que respondan a sus particularidades culturales frente a leyes y decretos centralistas. La presencia de población no indígena ilegal en sus territorios es uno de los mayores problemas, el 80% aproximadamente de sus ocupantes son no indígenas lo que se traduce en un aproximado del 75% del territorio en manos de pequeños parceleros y grandes propietarios ganaderos que incluso viven fuera de la región (Cartago, San José, Zona Norte), y que usufructúan la tierra sin ningún beneficio para la comunidad, más bien niegan el acceso a los indígenas a las mejores tierras para el cultivo y otras actividades.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís estableció que su Sitio de presa estaría localizado sobre el río General Superior, tres kilómetros aguas arriba de la comunidad de El Brujo. El anclaje de la presa en la margen izquierda del río se ubica en territorio indígena de Térraba. Según las proyecciones del ICE-PHED, todas las obras asociadas a la Presa estarían desarrollándose precisamente en esa margen: accesos, patios de materiales, campamentos, túneles de desvío, preatagüa, atagüa, presa, canal de restitución, patio de maquinaria, talleres, tajos, etc. Cálculos conservadores estiman el impacto total en un área no menor a dos kilómetros cuadrados.

Así mismo, el embalse del PHED inundará un aproximado de 700 hectáreas del territorio indígena. Debe aclararse que la totalidad de estas tierras se encuentra en usufructo por pobladores no indígenas y en general no se desplazará a ningún habitante indígena o no indígena, por ser propiedades en su mayoría de vocación ganadera. Sin embargo, evaluar el impacto del PHED solo desde la perspectiva de reasentamiento de poblaciones sería una visión muy simplista, siendo conocido en el tema de gestión de proyectos, que los impactos sociales empiezan desde los primeros trazos de cualquier obra o proyecto. El impacto social del PHED en la comunidad de Térraba ha tenido múltiples niveles, la polarización de la comunidad en cuanto opiniones a favor y en contra, es solo uno de los casos más visibles.

Desde el planteamiento y concreción del PHED como opción a desarrollar, sus autoridades se abocaron en un trabajo más intenso de gestión con la comunidad indígena de Térraba y sus actores sociales. Incluso, ya para el 2006 se había realizado una supuesta "consulta" a los y las pobladoras indígenas, sobre el apoyo o no de la obra, en el marco del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, una interpretación del Convenio 169 por parte del Área Legal del ICE Central en colaboración con el PHED, determina que la consulta no es vinculante por lo que los resultados son desestimados, aunque ya para ello habían surgido considerables críticas respecto a la metodología utilizada y al tipo de convocatoria empleada en su realización. Voces desde lo interno de la comunidad, así como de grupos organizados externos

empiezan a generar los primeros cuestionamientos fuertes a todo el proceso.

En esta misma línea de interpretación legal, el ICE-PHED establece que por derecho el único actor social que tiene potestad de negociación en el territorio indígena de Térraba es la Asociación de Desarrollo Indígena (ADIT) en la persona de su presidente, en complemento con las personas dueñas legales o por posesión de los terrenos en donde el PHED tenga intereses de desarrollar investigación u obras de cualquier magnitud. Toda instancia oficial o no, actores formales e informales, asociaciones y cualquier otra voz dentro de la comunidad es automáticamente invisibilizada. Las voces contrarias son descalificadas.

La posición de la ADIT en cuanto al proyecto en los siguientes años al 2006 ha sido errática. Surge un claro grupo de oposición en el seno de la comunidad que cuestiona el alcance y tipo de negociación que se están llevando a cabo. En el 2007-2008, el PHED alcanza un acuerdo temporal con la ADIT para continuar con investigaciones geológicas, arqueológicas, biológicas y geofísicas en su territorio, bajo el compromiso de ciertas obras de mejoramiento en infraestructura comunal, como lo fue el cementar o asfaltar el camino que comunica la carretera Interamericana con el centro de la comunidad de Térraba. Los trabajos solo se completaron de forma parcial en el primer kilómetro.

A finales del 2008, la ADIT envía una nota al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicando que la comunidad de Térraba, en la figura legal de la ADIT, está en contra del esquema actual del PHED y propone una figura de participación activa de la ADIT en el financiamiento y construcción del proyecto, como contraparte y por tanto que los beneficios económicos serían compartidos en la misma proporción de participación.

Para esas fechas, aunque todavía no existiera ninguna claridad sobre el tipo, forma y ente financiero que proporcionaría el dinero necesario para la construcción y obras asociadas del PHED (calculados en más dos mil millones de dólares), el BID, como ente financiero interesado, había comprometido un giro aproximado de un millón

de dólares estadounidenses (1000000US\$) para financiar el Estudio de Impacto Ambiental del PHED, los cuales, de ser aprobado cualquier tipo de financiamiento posterior con ese banco para alguna obra del PHED, se convertiría en un donativo no reembolsable.

No se conoce si el BID contestó o no dicho comunicado y en caso que lo haya hecho, en qué términos. Sí se sabe que el PHED reaccionó con reuniones con personal del BID y con un sustancial cambio en las relaciones entre el PHED y la ADIT, al punto que en algunos segmentos del año 2008 y del 2009 interrumpen la comunicación.

Mientras, el grupo opositor al PHED toma fuerza, empieza a asesorarse con instancias nacionales e internacionales; extiende su área de acción al tema del patrimonio arqueológico y natural, además de la conservación y la identidad de la comunidad en referencia al río General Superior como espacio histórico y social, fuente de recursos y de materias primas. El tema del agua empieza a ser preocupación compartida por esta y otras comunidades. Integran a comunidades no indígenas como Pilas y Bijagual.

En recientes reuniones (septiembre, 2010) sostenida con vecinos de la comunidad de Térraba, algunos vecinos reiteraron su compromiso con la lucha por construir un espacio de reflexión extenso sobre los verdaderos impactos del proyecto hidroeléctrico sobre la comunidad tanto en el proceso de gestión y construcción, como en el largo plazo de su puesta en funcionamiento. La preocupación central coincide en muchos puntos con las de los pobladores de Ceibo, en cuanto a la falta de información o datos confusos y tergiversados, amenazas, políticas de imposición de decisiones, avance de obras sin consultas a la comunidad, deterioro de caminos y calidad de vida, silencio de las autoridades locales, institucionales y nacionales ante exigencias, solicitudes de información y espacios de discusión; cooptación de líderes comunales, que, al decir de varios de ellos y ellas, es con fines de intimidación y menoscabo de su labor y calidades personales ante la comunidad en general.

Actualmente, la ADIT ha estado coincidiendo en mayor medida con puntos de vista de los grupos de oposición “no oficiales” de los

vecinos. El debate se ha abierto a la comunidad, tratando de incluir en particular, a la población indígena como tal, en el fomento de una autodeterminación informada de sus habitantes.

Como se indicó en los primeros apartados de este trabajo, la comunidad de Térraba se convirtió en uno de los principales focos de atención y acción del PHED-ICE a partir del 2006, lo cual no fue previsto en ningún momento en las décadas anteriores al ser el Proyecto Hidroeléctrico Boruca una opción que se limitaba a una inundación parcial de su territorio.

Esta comunidad es el más claro ejemplo de las dificultades de reacción de la sociedad civil en el establecimiento de espacios de debate e información para definir una posición común frente al proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el PHED no aprovechó la coyuntura para posicionar un discurso real de desarrollo sostenible y participación de la comunidad, más bien se generó un ambiente de constante tensión sin reconocer los impactos a los que ya está sometida Térraba por el aumento significativo de personal, automóviles, maquinaria, etc.

Si bien diversos grupos civiles, así como organizaciones no gubernamentales han estado colaborando con la comunidad de Térraba por lo menos desde el año 2007, sería de marcado valor que instituciones como las universidades públicas pudieran brindar orientación en el proceso de organización y gestión comunal, sin olvidar el valor técnico en temas específicos como el patrimonio arqueológico, natural, geología, etc.

Aunque el llamado es directo sobre las casas de enseñanza públicas por contar estas con una infraestructura académica, física, profesional y administrativa, además de la experiencia que ayude a generar proyectos de apoyo y colaboración con la región abordada en este artículo, es claro que los mismos no pueden ni deben limitarse a dichas casas de enseñanza, y que la mejor vía de proyección social para generar las bases de un desarrollo autónomo y sostenible para las comunidades en mención y sus habitantes pasa por la colaboración y cooperación que otras instituciones públicas, en conjunto con universidades privadas y el sector empresarial pudieran implementar en la región.

Comunidad de Buenos Aires

Es el centro urbano más grande de la región después de San Isidro de Pérez Zeledón. Cabecera de cantón y núcleo histórico principal en el desarrollo social de la mayor parte de las comunidades que se ven y verán afectadas por el PHED.

Para el 2006, en Buenos Aires únicamente funcionaba un pequeño grupo de trabajadores del proyecto y del ICE, vinculados en su mayoría con las denominadas Área Social y Área Legal. En conjunto contaban con un aproximado de entre 20 y 25 personas y dos o tres carros oficiales de transporte.

A finales del 2006, se declara el cierre técnico del Proyecto Hidroeléctrico Boruca y se consolida la propuesta de El Diquís como opción de proyecto, con lo cual, en unas pocas semanas, el centro de operaciones del proyecto se traslada del campamento establecido en Cajón de Boruca (17 km antes de Palmar Norte) a oficinas alquiladas en Buenos Aires.

Ya para mediados del 2007, el personal en Buenos Aires aumenta en más de 100 personas, en su mayoría provenientes de zonas fuera del cantón; para el 2008 ya se tienen habilitados dos campamentos: uno de oficinas, el otro de dormitorios y comedor. Ya alberga a más de 350 personas. Para finales del 2009, el PHED cuenta con más de 650 personas en su mayoría concentradas en dicha ciudad; dos campamentos, un complejo de oficinas alquilado, dos extensos patios de materiales y un terreno de aproximadamente nueve hectáreas donados por el IDA para la construcción del campamento definitivo del proyecto, en el límite inmediato del casco urbano. En la actualidad la planilla es de aproximadamente 800 personas.

La flotilla se compone de más de cien carros entre oficiales y alquilados; en el 2009 y por momentos, el tránsito de maquinaria pesada ha incluido más de 60 camiones tipo vagoneta que han trasladado materiales como piedra, arena y lastre entre Rivas de Pérez Zeledón y Buenos Aires (aproximadamente 70 km). El aumento en maquinaria pesada ha sido en la misma medida.

Con este panorama es fácil comprender que los impactos sociales, económicos, físicos y medioambientales sobre la comunidad llevan por lo menos tres años de incidir significativamente en el funcionamiento normal de la población. El aumento exponencial de personal y recursos en un espacio de tiempo sumamente corto, pero también abrupto, ha implicado que gran parte de la población de Buenos Aires ni siquiera comprenda en su totalidad el alcance de la situación, según lo constataron varios líderes comunales con los que tuvimos la oportunidad de reunirnos este año (2010).

Desde hace varios años, el tema del agua se ha vuelto una constante en la discusión de las problemáticas locales y regionales, al constatarse que el sistema de abastecimiento ha sobrepasado su vida útil así como la capacidad de carga de los acueductos. En la actualidad, Buenos Aires cuenta con un aproximado de 20000 habitantes como distrito central y de ellos unos 13000 viven en el casco urbano y alrededores (INEC, 2008).

Precisamente, dentro de los principales problemas, además del crecimiento no planificado hacia las periferias y la falta de opciones educativas, laborales y de salud, es lo referente al acceso y calidad del recurso hídrico. Para la tormenta Alma en abril del 2008, la zona sufrió severas consecuencias principalmente en su infraestructura vial. En el caso de la comunidad indígena de Ujarrás (norte de Buenos Aires), perdió el único puente que les permitía la comunicación y acceso al centro urbano y de ahí el desplazamiento al resto de la región y el país.

Para enero del 2009, las autoridades del MOPT y del Gobierno local no habían concretado ninguna solución específica al problema. Esto generó que la comunidad como un todo reclamara y tomara medidas de presión contra los implicados, cerrando el acueducto rural, que suministra toda el agua a Buenos Aires, Ceibo, San Carlos, Caracol y las comunidades situadas al sur y en los alrededores del casco urbano.

Este evento dejó en evidencia la vulnerabilidad de la población en el tema del suministro de agua, tomando en consideración que el acueducto en sí está considerado como obsoleto y sobrecargado en su uso por lo menos desde la década de

1990. Incluso, la Municipalidad ha negado permisos de construcción de viviendas y residenciales, algunos de interés social, ante lo incierto del suministro del agua.

Sin entrar en discusión sobre el legítimo derecho de la comunidad de Ujarrás en aplicar esta medida de presión, lo que sí quedó en evidencia es el riesgo por desabastecimiento que tiene la zona. De forma paralela empezaron a surgir cuestionamientos sobre la carga que ha empezado a representar el PHED en el requerimiento de este recurso para la manutención de una población de más de 650 personas y que dentro del planteamiento o plan operativo, alcanzarían entre 3000 y 3500 trabajadores y trabajadoras en determinado momento, concentrados la mayoría en grandes campamentos en los límites de la ciudad.

La habilitación de estos campamentos agrega disgusto a sectores de la comunidad los que denuncian la imposibilidad de desarrollar planes de vivienda que solvente esa necesidad básica, pero que sí existen permisos para generar espacios de alto requerimiento hídrico. Una de las agrupaciones entrevistadas y que retroalimentaron estas temáticas, es la recién conformada (2010) Asociación de Líderes Comprometidos con los Derechos de los Bonaerenses, que en su mayoría lo integran personalidades del entorno comercial y profesional del cantón, preocupados, además, por la desinformación existente, la falta de oportunidades, el aumento en los índices de inseguridad y presencia de drogas en la ciudad, así como la proliferación de espacios de consumo de licores.

En estos problemas el PHED tiene poca o ninguna injerencia, quizá solo en el último tema (consumo de alcohol), el cual, lamentablemente, no ha sido abordado como parte de los impactos que proyectos de este tipo genera en una comunidad, aunque sí han sido documentados para otros entornos con presencia de proyectos ICE.

El reclamo principal de esta agrupación es que el PHED no está planteando ni considerando ningún plan integral que fomente el desarrollo sostenible y sustentable no solo de Buenos Aires, sino de la región en general, en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, argumentan que no se está reflexionando sobre los aportes reales que

podría esperarse del proyectos y de aquellos que la institución está promoviendo y que, la visión del proyecto sobre los impactos se circunscribe únicamente a aquellos que estén en su ruta de funcionamiento y no como opción de mejoramiento integral de las comunidades.

El resultado del autoanálisis que hace esta organización, es que el proyecto, a través de sus autoridades y voceros principales, no parece haber considerado que el desarrollo y presencia de un megaproyecto que se estima genere millones de dólares en ganancia mensuales una vez que entre en operación, pueda convertirse en actor clave para el desarrollo de la zona, y que la cantidad de recursos en ganancias, puedan reinvertirse en cierto porcentaje, a la región.

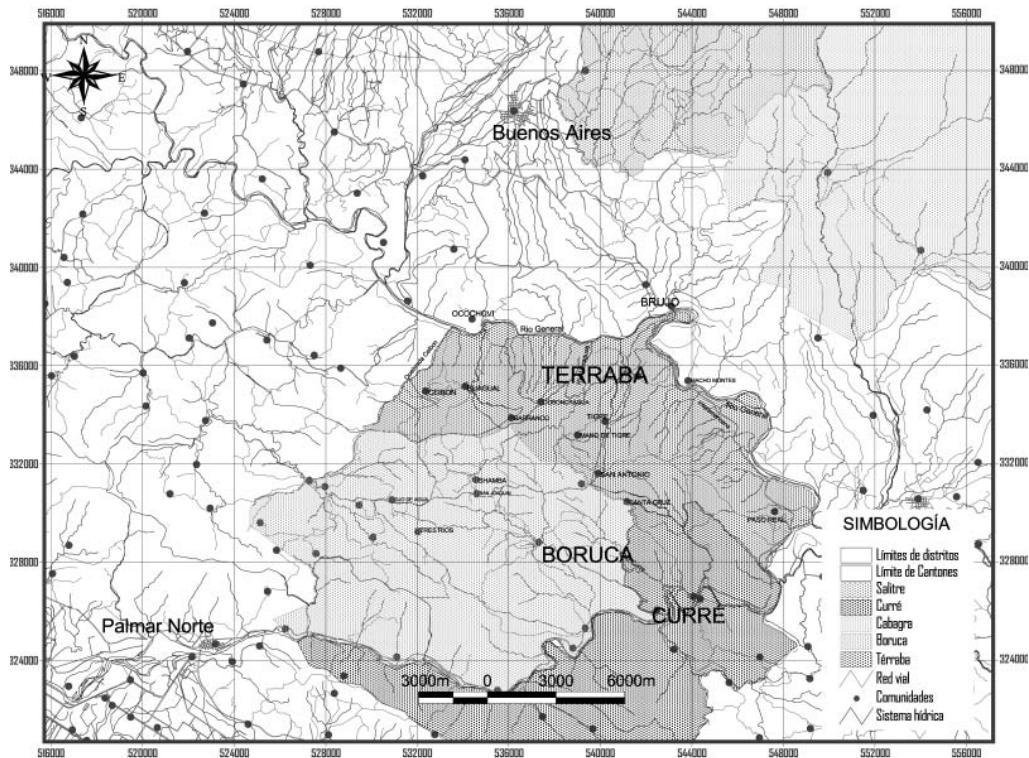
Nuevamente, nos topamos con una situación recurrente, que se resume en que ésta, igual que la mayoría de las asociaciones y agrupaciones locales, no se opone *per se* al proyecto, ni a que este se lleve a cabo, sino más bien que quisieran ser parte y protagonistas en el impulso del mismo, pero que a su vez, esto redunde en un plan de acción en donde el ICE, como casa matriz del PHED, se comprometa a garantizar un aporte constante y ascendente para proyectos comunales, locales y regionales que ayuden al cantón de Buenos Aires a salir de los círculos de inacción, pobreza y desestructuración que ha sufrido como parte de sus procesos históricos.

Sin duda, parte del aporte de las Universidades Públicas está en el acompañamiento de este tipo de grupos y su orientación en el debido proceso de conformación y consolidación como agentes sociales de cambio y la búsqueda de propuestas de autogestión que se basen en un principio de descentralización con respecto a los esquemas políticos y económicos determinados desde el Valle Central.

Es de resaltar que muchas de estas agrupaciones tienen claridad en cuanto a los problemas que aquejan a sus sociedades, también sobre las necesidades y los esquemas básicos para su superación, entendiendo en el trabajo conjunto de los diversos actores sociales individuales o corporativos, formales e informales en la planificación de proyectos y metas al mediano y largo plazo, la única solución posible.

Figura 3

Cinco de los territorios indígenas ubicados en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires no aparece Ujarrál al norte).



Turismo

Desde el año 2008, el turismo alcanzó más de dos millones de visitantes extranjeros convirtiéndose en la principal actividad económica del país (ICT, 2008), extendiéndose a casi todos los sectores de servicio e incidiendo desde la década de 1990 en la estructuración y conformación social, económica e incluso política de las comunidades y regiones.

Aunque la crisis económica mundial del 2009 generó un estancamiento en la actividad, la cifra de visitación se mantuvo muy similar al 2008. Las políticas estatales en materia económica y del sector empresarial, centran su atención precisamente en un impulso constante de esta actividad, ampliando la oferta a regiones del país que hasta la fecha han mantenido un perfil de desarrollo turístico moderado si se les compara con el crecimiento en el Pacífico Norte y Central. Tal es el caso del Pacífico Sur.

Este tema es un elemento importante a considerar dentro del desarrollo del PHED, ya que es un discurso recurrente en las apreciaciones, comentarios y expectativas que tienen los habitantes de cada una de las comunidades abordadas. Además, hay que considerar que esta región en particular, por diversas razones, se ha mantenido al margen del auge de esta industria; las comunidades han seguido muy de cerca el desarrollo del turismo tanto en el Pacífico Norte, en el Central, y en la última década, en el Pacífico Sur, principalmente en relación con la Fila Costeña, el Golfo Dulce y la Península de Osa, cuyo auge ha sido significativo en el nuevo milenio, con afectaciones medioambientales ampliamente denunciadas por autoridades y vecinos, así como incidencias en la conformación sociocultural de las zonas costeras.

Terraba, las comunidades de Ceibo y Buenos Aires, así como las demás que no se mencionan en este ensayo, centran un interés particular

en el turismo como posible fuente de empleo y generador de recursos que permita el despegue de la región y el desarrollo de sus diversos potenciales. Buenos Aires como cantón cuenta con la particularidad de contener en sus límites políticos seis territorios indígenas de los grupos étnicos: bribri, boruca, cabécar y térrabas, cuatro de los ocho que hay en Costa Rica y seis territorios de los 24 formalmente reconocidos.

En la misma línea, la región en general ha recibido el aporte cultural histórico de grupos chiricanos, colombianos, europeos (principalmente alemanes e italianos –en la zona de San Vito de Java-), centroamericanos y del valle central costarricense lo que genera un crisol de expresiones de diversidad cultural que va desde práctica y costumbres, hasta lenguas y dialectos, pasando por comidas y un rico acervo apenas explorado de patrimonio intangible.

Este esquema multi y pluricultural, aunado a bellezas escénicas y un ambiente de ruralidad conservada y rica en experiencias históricas, además de una extensa variedad de opciones paisajísticas (costa, montañas, valles, deltas y ríos se extienden en espacio de pocos kilómetros) promete convertirse en una fuerte opción para el desarrollo turístico. Las comunidades están consientes de su potencial e incluso reflexionan sobre los canales necesarios a seguir para prevenir que las propiedades no sean acaparadas por parte de capital foráneo, y que más bien cualquier plan de desarrollo de la industria del turismo surja de empresarios y actores locales.

El proyecto se ve como un catalizador para este tipo de industria. Más que como un atractivo, sería fuente de recursos que permita la implementación de planes, proyectos, infraestructura y espacios de explotación turística en las diferentes localidades. Las comunidades desean un turismo sostenible, amigable con la sociedad y el ambiente, que prevenga los errores evidenciados para la costa pacífica, principalmente en el norte y central, y que más que el aislamiento local, fomente la integración de los diversos sectores productivos y sociales.

La concatenación de un turismo cultural, turismo ecológico, turismo rural e incluso turismo de aventura, recreación y de retiro, son espacios posibles, explorables y necesarios de

consolidarse desde el impulso local, área en la cual, la Universidad puede reiterar su papel protagónico en la generación de políticas innovadoras y sostenibles como aporte para la superación de los círculos de marginalidad en los que han estado sumergidos los habitantes de la región como un todo.

Reflexiones finales

A lo largo del texto se han aportado algunas reflexiones y recomendaciones surgidas en el seno de reuniones formales e informales con actores locales que han expresado sus preocupaciones, pero sobre todo, se ha reafirmado una imperante necesidad de respaldarse en opiniones, datos y comentarios que no surjan únicamente de la posición oficial PHED o de su casa matriz el Instituto Costarricense de Electricidad.

La incertidumbre inicial, las expectativas por nuevas oportunidades que el PHED pudiera brindar para la mejora de la situación individual, familiar y comunal han dado paso a temores, inseguridades y desconfianzas. En muchos casos, madres jefas de hogar, jóvenes, líderes comunales y vecinos en general, han expresado su desasosiego, incluso miedo a un futuro cada vez más incierto: en Ceibo una madre asegura sentirse aislada y marginada, sin ninguna visión de su futuro; un operario afirma temer hablar por no perder su trabajo; en Térraba, una líder comunal reconoce temer por su integridad física y la de sus hijos; en Buenos Aires hay familias que reconocen estar pensando en alejarse de la zona para evitar conflictos, al mismo tiempo que están temerosas por el aumento de la inseguridad general; en Pilas una joven asegura sufrir estados de estrés e insomnio recurrente ante la incertidumbre por la falta de información del ¿cuándo? y ¿cómo? deberán abandonar la casa donde tres generaciones han vivido.

No es interés evaluar la dimensión de estas aseveraciones, sino solo señalar su existencia en la subjetividad de las personas y en el clima emotivo de las comunidades, asimismo dejar constancia que este tipo de expresiones han surgido desde mediados del 2009. Esto induce a pensar que un proyecto como el PHED, que aun en estos momentos no ha definido un cronograma

de ejecución concreto, generará una serie de consecuencias e impactos en cuya medición real, las universidades públicas deberían aportar una visión alternativa, independientemente si eso conlleva a corroborar o refutar los datos “oficiales” aportados por el PHED-ICE, que en la actualidad es la única fuente de información con la que cuentan las comunidades y sus habitantes.

Programas de Trabajo Comunal Universitario como los impulsados desde la Universidad de Costa Rica, que integren diversas especialidades universitarias de las Ciencias Sociales, Económicas, Ingenieriles, Arquitectura, etc., podrían ser un medio de acción social prioritaria en una región que históricamente ha padecido los avatares del aislamiento por parte de instituciones y gobiernos.

En este sentido, el PHED representa una oportunidad sin precedentes para las Universidades Públicas de consolidar su imagen de entes independientes y preocupados por los procesos sociales e históricos, no solo nacionales, sino también locales y específicos en zonas periféricas del país. Constituye, además, un espacio para la aplicación de programas que concuerden con los objetivos quinquenales de una mayor proyección comunal e incidencia en el trazado de rutas de autogestión de sectores marginados.

En particular, el aporte de la Universidad de Costa Rica no sería tanto en el campo científico de la investigación, por cuanto el Instituto Costarricense de Electricidad ha realizado estudios consistentes, densos y de diferente profundidad a lo largo de décadas en la región, sino en la visualización en su papel de ente transformador de realidades de la mano de las necesidades reales reclamadas por grupos y comunidades diversas.

En este mismo contexto, hay que reconocer y profundizar en la revitalización de los actores sociales, que más que oposición, buscan una mayor participación en cualquier proyecto regional que se desee instaurar en la zona. Desean manejar toda la información necesaria para que puedan tomar decisiones atinentes y no seguir siendo espectadores pasivos sin vos ni voto, máxime en un proyecto que indudablemente define y definirá el porvenir de sus comunidades.

Hemos visto una impresionante reorganización de fuerzas civiles locales, con estimaciones

que calculan en más de 80 organizaciones formales e informales entre los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa. Sus objetivos son diversos, muchos incluso antagónicos, pero todos estos grupos reflexionan sobre problemáticas específicas que aquejan a sus localidades desde hace años, estando convencidos/as que las posibles soluciones ya no pueden esperarse de discursos políticos y promesas inciertas de instituciones públicas mal financiadas y peor aun administradas. Quieren incidir activamente en todo plan, proyecto o política de desarrollo, imprimiendo la dosis de realidad que solo la experiencia de vivir los problemas, carencias y necesidades locales puede brindar.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, el Instituto Costarricense de Electricidad o cualquier otra instancia empresarial, pública o privada, deberá reconsiderar a fondo sus estrategias de gestión socioambiental si quieren garantizar la viabilidad de cualquier obra en la región, tomando en cuenta que el flujo de información desde y hacia las comunidades es una constante inevitable, que de ignorarse, solo se traducirá en la construcción de confrontaciones sociales a diversas escalas.

Queda claro que en este trabajo apenas se anuncia un resumen de la situación actual de tres de las comunidades afectadas por el planteamiento del PHED y que se incluyen dentro del primer y segundo grupo enunciados al inicio. Existe un acervo significativo de información y datos de la situación que están viviendo comunidades de relevancia como Pilas, Parcelas, Paraíso, China Kichá, Cañablancal entre muchas otras, que merecerían un espacio por cada una.

Referencias bibliográficas

- Bozzoli, M.E. e I. Wing-Ching. (1979). *Encuesta Socioeconómica en la zona del PH Boruca*. Universidad de Costa Rica e Instituto Costarricense de Electricidad. San José, Costa Rica.
- Crespo, M. et al. (1994). *Esbozo etnográfico sobre las comunidades de Boruca y Térraba*. Robert Carmack (editor). En Soplos

- de viento en Buenos Aires. Editorial de la Universidad de Costa Rica, p. 165–172.
- Corporativo. (2009). *Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*. Programa Estado de la Nación, San José, Costa Rica.
- ICT. (2002). *Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 2002-2012*. Instituto Costarricense de Turismo. San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Turismo.
- ICT. (2009). *Anuario Estadístico 2008*. San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Turismo.
- Díaz, G. (2008). *Implementación del derecho de consulta indígena en la comunidad de Térraba*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.
- Espinoza, J. et al. (2005). *Análisis sedimentológico del delta Térraba (Costa Rica)*. Informe de la Campaña Geológica 2005, Universidad de Costa Rica, Escuela Centroamericana de Geología.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica). (2008). *Cálculo de Población por Provincia, Cantón y Distrito al 30 de junio del 2008*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. San José, Costa Rica: INEC, 2008.
- Murillo, J. y A. Cerdas. (2003). *Análisis de estanqueidad y estabilidad de laderas en el sector del embalse PH Boruca (Informe de Avance)*. Instituto Costarricense de Electricidad, UEN Proyectos y Servicios Asociados, Centro de Diseño, Área de Ingeniería Geológica.
- Pérez, B. (2008). *Patrones de Asentamiento Antiguos en el eje Pilas Colinas, cuenca media del río General Superior*. Tesis de Licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.

Información en internet

La Nación digital: http://3.bp.blogspot.com/_r0T5JRNKRk/S7yGhLJk_KI/AAAAAAAAA-s/ee07XLZ3LyE/s1600/represa.jpg .**Consultado:** 10 de octubre del 2010, a las 23:20 horas.

